



Junta General
del Principado de Asturias

XII LEGISLATURA SESIÓN DEL PLENO NÚMERO 42 (24 de junio de 2025)

ASUNTO NÚMERO 17

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vox sobre reforma de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (12/0178/0058/03530)

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 23 de enero de 2024. La iniciativa fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias, serie B, número 97, de 24 de enero de 2024).

El Grupo Parlamentario Vox, a través de su portavoz, Carolina López Fernández, al amparo de lo previsto en los artículos 216 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente proposición no de ley para su debate en el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, indica en su exposición de motivos que «uno de los principios jurídicos fundamentales en que se basa el actual sistema de relaciones laborales en España es el contenido en el artículo 28.1 de la Constitución española de 1978, el cual reconoce el derecho a la libertad sindical como un derecho fundamental de “todos a sindicarse libremente”», además de establecer «el derecho a la libre sindicación como derecho fundamental de los españoles».

La norma en la que se encuentran reguladas las subvenciones a organizaciones sindicales es la «Orden TAS/1303/2007, de 26 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical».

El preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, LTAIBG, establece que «la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política».

Según el artículo 3 a) de la LTAIBG, serán considerados como «otros sujetos obligados» por las disposiciones del capítulo II de la citada ley, que hacen referencia a la publicidad activa, «los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales». El principio de publicidad activa versa sobre la obligación de publicar de manera permanente determinada información pública exigida por la ley en los portales de transparencia o sitios webs de cada uno de los sujetos obligados.

En lo relativo a la publicidad de la información económica, presupuestaria y estadística, las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales han de hacer pública, de



conformidad con el artículo 8.1 de la LTAIBG, los siguientes actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria:

- a) Todos los contratos celebrados con las Administraciones públicas, indicando su objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, la identidad del adjudicatario, las modificaciones del contrato, las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos, así como el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados.
- b) Los convenios suscritos con las Administraciones públicas, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas, así como, en su caso, las subcontrataciones que se realicen, con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.
- c) La información sobre las subvenciones concedidas por las Administraciones públicas, con expresión de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios, en su caso, dentro del sindicato y asociación empresarial que lo sea.

Según los últimos informes relativos al año 2022 elaborados por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España de la evaluación sobre el cumplimiento de la publicación activa de las entidades preceptoras de subvenciones y ayudas públicas, el índice de cumplimiento de la información obligatoria se sitúa en el 61 % en el caso de Comisiones Obreras (CC. OO.) y en el 31,6 % para la Unión General de Trabajadores (UGT). Datos que el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno valora muy negativamente y que incumplen de manera reiterada lo estipulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

En relación con estos datos, a pesar de la obligación que la ley establece de la publicidad activa para estos preceptores de subvenciones y ayudas públicas, se hace necesaria la toma de medidas efectivas para garantizar su cumplimiento.

Cabe recordar que, solo durante la pasada legislatura, en Asturias, y sobre la base de los datos facilitados por la Consejería de Hacienda a Vox tras una solicitud de información el pasado 27 de diciembre de 2023, el Gobierno del Principado de Asturias ha llevado a cabo transferencias de crédito a UGT (Unión General de Trabajadores) y CC. OO. (Comisiones Obreras) por la cantidad de 1,9 millones de euros solo en un año, fondos que provienen directamente del bolsillo de los asturianos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vox presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a instar al Gobierno de la nación a:

1. Reformar la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, a fin de que las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales tengan la obligación de hacer pública toda la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria, de manera que sea conocida no solo por los afiliados, sino por el conjunto de la sociedad y, en especial, en lo relativo a cuentas anuales, auditoría de cuentas, presupuestos, retribuciones de altos cargos y máximos responsables, ayudas públicas recibidas, memoria de actividad y su entero régimen económico, cuotas de afiliación y rendimientos de gestión patrimonial e inversiones.



Junta General
del Principado de Asturias

2. Incluir en dicha reforma la obligación de crear un protocolo y un código ético interno en las citadas organizaciones que permitan depurar responsabilidades rápidamente ante casos de corrupción.

3. Garantizar, por los todos los medios necesarios, el cumplimiento de los puntos a), b) y c) del artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Palacio de la Junta General, 17 de enero de 2024. Carolina López Fernández, portavoz.